

# DEMOCRACIA LIBERAL\*

Rodolfo Cerdas Cruz

## **DEMOCRACIA LIBERAL. PROYECTOS BURGUESES DE DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE DOMINACIÓN IMPERIALISTA. CONSIDERACIONES SOBRE SU CRISIS**

En la América Latina, y Costa Rica no es excepción, convergieron diversas corrientes ideológicas que matizaron el quehacer político de toda la región.

Concretamente, a principios de este siglo podemos encontrar bien definidas, las siguientes:

- a) Anarcosindicalistas;
- b) Socialistas;
- c) Populistas; y
- d) Comunistas

Las primeras hicieron su aparición sobre todo por medio de las inmigraciones de trabajadores italianos y españoles. Estos trajeron consigo

---

\* Extraído de Cerdas Cruz (1978) "Costa Rica: problemas actuales de una revolución democrática" en Zelaya Goodman *et. al*, *¿Democracia en Costa Rica? Cinco opiniones polémicas* (San José: EUNED).

diversas tendencias de tipo anarquizante y promovieron los primeros intentos de organización gremial en nuestros países. En Costa Rica, por ejemplo, las primeras huelgas reportadas incluyen de manera relevante la participación de italianos y españoles. Estos últimos, sobre todo, imprimieron su marca a la huelga de panaderos que se produce en los primeros años de este siglo y que tuvo significativos ribetes de violencia.

Por su parte las corrientes socialistas, que tanta importancia tuvieron en países más desarrollados que el nuestro, como Argentina, Chile y Cuba, no encontraron condiciones económicas y sociales en nuestro país, para influir ideológica o políticamente.

Exactamente lo contrario sucedió con las otras dos corrientes: la comunista y la populista, que convergieron en un momento crítico de la historia de América Latina.

Por lo que hace al populismo, tuvo una proyección de tipo muy variado y con características distintas en los diversos países latinoamericanos. Las experiencias populistas nacionales, con todo y manifestándose de manera diferente en cada país, surgieron de configuraciones estructurales comunes y correspondieron a configuraciones históricas similares.

La característica común más sobresaliente que podríamos señalarle al populismo en América Latina, se sitúa en el hecho de que tales experiencias se dieron en el momento en que se conformó definitivamente la sociedad de clases y, con ella, la disociación entre el productor y los medios de producción.

Asimismo, y conjuntamente con la circunstancia dicha, las “manifestaciones más notables del populismo aparecieron en la fase crítica de la lucha política de aquellas clases sociales surgidas en los medios urbanos y en los centros industriales contra las oligarquías y las formas arcaicas del imperialismo”.

En el orto del movimiento comunista y populista latinoamericano, se encuentra pues, lo que Ianni llama la “ruptura estructural” que “acompañó a la crisis del sistema capitalista mundial y las correspondientes crisis del sistema capitalista mundial y de las oligarquías latinoamericanas”.

Sin embargo, pareciera importante subrayar el papel jugado en América Central por el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre, no solo por presentar una formulación explícita y relativamente consecuente, sino por la influencia ideológica real ejercida por dicho movimiento en Costa Rica y Centroamérica.

En efecto, el APRA promovía a nivel continental una política sustentada en un antimperialismo latinoamericano. Este permitiría el desarrollo de un capitalismo nacional, sobre la base de una participación

indispensable del Estado para compensar tanto la debilidad de la burguesía criolla como el poder de los países imperialistas y, en particular, de los Estados Unidos.

La organización política encargada de promover estos objetivos fundamentales —otros como la internacionalización del canal de Panamá, sustentada por don José Figueres hasta hace muy poco tiempo, no interesan para el caso—, sería un partido definido como una organización de frente único, pluriclasista y antioligárquico. Evidentemente, se trataba de crear un instrumento político capaz de poner a los sectores populares detrás de una burguesía desarrollista que buscaba, así, condiciones políticas y sociales adecuadas para desarrollar su capitalismo propio. En las condiciones de dominación imperialista sobre América Latina, el APRA promovía de ese modo facilitar tanto la acumulación interna de capital, indispensable para poder despegar en su proyecto capitalista, como el sustento político también insoslayable para poder enfrentar las presiones que el imperialismo yanqui ejercía y ejercería sobre tal proyecto.

Este planteamiento, y aun esta terminología, se encuentra directamente en las publicaciones apristas de la época. El entronque entre elementos como García Monge, Omar Dengo y Carmen Lira, en Costa Rica; Froilán Turcios en Honduras; o Alberto Masferrer en El Salvador, con el pensamiento aprista, encontrará su mejor expresión política en el pensamiento de José Figueres y en la práctica política del Partido Liberación Nacional (PLN).

La confusión inicial entre el populismo antimperialista del APRA y el comunismo de los partidos afiliados a la Tercera Internacional, se fue disolviendo poco a poco hasta hacerse evidente el carácter opuesto de ambas concepciones.

Los partidos comunistas, portadores de una visión internacionalista del fenómeno nacional, sufrieron en carne propia los errores de concepción y método de la dirección de la Comintern. Incapacitados para generar formulaciones y respuestas propias, los partidos comunistas latinoamericanos perdieron el momento nacional de la lucha, no pudieron resolver los problemas de crear, desarrollar y mantener un frente único antimperialista y establecer formas de colaboración efectivas con los movimientos populistas del área. Equivocando el enemigo en la práctica, adversaban al imperialismo pero combatían, a pesar de las palabras, a los débiles gérmenes de capitalismo interno. Y cuando no lo hacían, se limitaban a poner sus organizaciones y masas a la cola de la burguesía criolla. Esto determinó que los partidos comunistas latinoamericanos no fueran nunca alternativa real en la vida política de sus respectivos pueblos y que los éxitos que se produjeron tuvieran la característica común de haberse dado al margen de

las directrices rígidas y dogmáticas emanadas de la lejana dirección de la Comintern.

Carlos Rafael Rodríguez, actual viceprimer ministro de Cuba y antiguo dirigente del Partido Socialista Popular (comunista) de su país, tratando de sustentar una originalidad perdida del todo para la revolución cubana después de la suscripción de los acuerdos de los Partidos Comunistas en la Habana en 1975, no tuvo más remedio que hacer el siguiente balance:

Hay un hecho indiciario: solo en mayo de 1969, cincuenta años después del Segundo Congreso de la I.C., vino a reconocerse en un texto donde se abordan colectivamente problemas del movimiento comunista la diferencia en el desarrollo económico y social, que distingue a la América Latina de la mayoría de los países coloniales y semi-coloniales de Asia y África. Por no penetrar en esa diferencia, por no comprender que una parte de los objetivos democrático-burgueses quedaron realizados ya en la América Latina hace muchos años y que el capitalismo llegó a ser en este continente una estructura dominante aun con su contrapartida de retraso y semifeudalidad, no se supo distinguir siempre entre “burguesía” y “burguesía”, se promovieron alianzas que no corresponden al modelo leninista y carecían de su dinámica revolucionaria, se mezclaron los conceptos electorales con los de largo alcance revolucionario y se llegó en diversos países —dentro del gobierno y fuera de él— a posiciones seguidistas en las que no era el proletariado el que “neutralizaba y arrastraba”, sino el neutralizado y arrastrado... Mientras dependimos de dictámenes elaborados a miles de millas y sin contacto real con nuestro continente, se repitieron los ensayos frustrados.

Desde luego, esta situación correspondía no solamente a una dirección “lejana y sin contacto real con nuestras realidades”, para usar los términos de Rodríguez, sino a una compleja situación económica y social que mantenía a la organización proletaria como un cuerpo extraño que se aislaba una y otra vez del cuerpo social. El problema era mucho más complicado. La cosificación de las categorías marxistas en su significado europeo-occidental debía saltar hecha añicos al enfrentarse a las duras realidades del continente americano.

Mientras que, en la Europa de Marx y Engels, el capitalismo se desarrollaba a plenitud y al final de sus vidas generaba el monopolio que vendría a sustituir la libre competencia, en la Rusia de Lenin, situada entre la Europa capitalista y el Asia despótica, se terminó una etapa, la de las revoluciones democrático-burguesas, y se inició otra, la de las revoluciones socialistas. Pero Rusia continuaba siendo un país de desarrollo medio, con múltiples deformaciones y atrasos, en el cual predominaba, en más de un sentido decisivo, el desarrollo de tipo capitalista.

En América Latina, por el contrario, se mezclaban procesos productivos capitalistas desarrollados, como lo eran enclaves mineros y de plantación, con retrasos notables que se afincaban no solo en la estructura primitiva de tribus aborígenes de muy escaso desarrollo social, sino en la Edad Media Castellana.

La determinación de las tareas que debía cumplir un proceso social-transformador en la América Latina, no podía hacerse al margen de una determinación objetiva, no subjetiva ni teleológica de sus clases sociales, de la naturaleza de su Estado y del grado de desarrollo económico-social de la región. Esto implicaba determinar el carácter de la revolución latinoamericana.

El populismo trató de hacer estas determinaciones a partir de un proyecto nacional burgués que permitiera generar un desarrollo capitalista. El comunismo, por su parte, también lo intentó a su manera y pensando saltar etapas, pero a partir de una visión internacional que, por dogmático y errónea, no podía rendir cuenta de la realidad local.

Lo que sobró en uno, faltó en el otro. Incapaces los populistas de asir a profundidad los cambios operados en la época histórica que se vivía, promovieron un proyecto de transformación nacional que apuntaba a un objetivo inalcanzable en la época del imperialismo para un país subdesarrollado y dependiente: desarrollar un capitalismo criollo. Apresados en una visión internacional y en un conjunto de verdades intocables, los comunistas se encontraron con una realidad social interna que escapaba por los intersticios de sus categorías. Cosificadas estas, su inflexibilidad les impedía jugar el papel originario señalado por Marx para ellas: las de guía para la acción e instrumentos para la investigación. Por una inversión no por semi-oculta menos real, las categorías de clase social, desarrollo de las fuerzas productivas, revolución democrático-burguesa y revolución socialista, para solo citar algunas, pasaron a ser las realidades y estas, por arte de magia ideológica, simple ilustración ejemplar de aquellas.

El campesinado, la fuerza principal que yacía dominada y dormida en el continente, pero cuya energía revolucionaria se había adivinado en las insurrecciones indígenas del período colonial y resonaba con fuerza en Aguascalientes y Morelos, con Villa, Zapata y tantos revolucionarios mexicanos, no entraba con claridad en los esquemas de la Internacional. A pesar de las previsiones de Lenin sobre la indispensable alianza obrero-campesina para alcanzar la revolución, el campesinado latinoamericano no se adecuaba a las previsiones que se hacían sobre él. Sin una clase obrera fuerte y cohesionada, por la ausencia de un verdadero desarrollo industrial; con un notable atraso en el desarrollo capitalista de la agricultura, en virtud de la estructura agraria heredada del período colonial; y con islotes productivos

capitalistas gestados al amparo de la inversión extranjera, el esquema clásico de la revolución resultaba falseado en la América Latina.

No fue posible conciliar con nuestras realidades la mecánica aplicación de la teoría leninista de la revolución democrático-burguesa como etapa transitoria para la revolución socialista, ya presente en Marx y Engels al analizar la situación en la Alemania revolucionaria de 1851, con la adición altamente significativa de que mientras que para estas debía ser la burguesía la que jefeara el movimiento, para Lenin sería el proletariado quien debía cumplir el papel de vanguardia que la burguesía había declinado frente a las fuerzas feudales zaristas.

Siempre el campesinado constituía la gran dificultad. Si a ello se suma la ineptitud para distinguir “burguesía” y “burguesía” y concebir una política adecuada para la pequeña burguesía democrática, resulta evidente que para la América Latina la concepción metafísica del Partido y de la revolución, que tanta vida y dialéctica tenían en Lenin, resultarían un molde inflexible donde lo que sobraba era cortado y donde lo que faltaba era forzosamente suplido.

Nuestro populismo mostró mayor flexibilidad y logró canalizar las aspiraciones de amplios sectores populares. Correspondiendo a las aspiraciones de desarrollo capitalista comunes a la población, las primeras cartas de la acción política se jugaban a su favor. Inconscientes de los límites reales que a su proyecto capitalista imponía la existencia del imperialismo y la nueva época histórica en que su acción se desenvolvía, los populistas no veían que las siguientes cartas irían contra sus objetivos iniciales. Despertadas de su letargo por la demagogia populista, las masas presionaban por alcanzar lo que se les había prometido. Pero frenados por las realidades nacionales e internacionales que determinaban un carácter sietemesino y deformado al desarrollo capitalista latinoamericano, los movimientos populistas se veían empujados contra su voluntad a la claudicación de sus propósitos originales y a la frustración política.

Tomados entre la imposibilidad de un desarrollo capitalista pleno e independiente de un lado, y las aspiraciones crecientes generadas por ellos mismos entre las amplias masas populares por otro, los populistas optaron por un asistencialismo social que resultaba, a mediano o largo plazo, según las condiciones políticas nacionales, insostenible y generador de burocracia. Incapaces de promover un desarrollo económico real de tipo capitalista, no por no aspirarlo sino por carecer de fuerza para ello, nuestros populistas se vieron forzados a ampliar al infinito el aparato estatal, convertido en el único botón político real para sus partidarios y en la única fuente masiva de empleo para quienes demandaban su incorporación al mercado de trabajo. Cediendo ante las presiones del capital extranjero, encontraron

un reducto para reclamar su coto nacional de actividad: nuevamente el Estado. Todo lo cual promovió un gigantismo estatal que disfrazó al asistencialismo populista de socialismo democrático y sentó las bases para crisis profundas insalvables por la vía populista.

Todo esto configuró en nuestro caso un Estado con características muy particulares, en virtud de la situación clasista interna en que vivía nuestro país. De una parte, la vieja oligarquía cafetalera había venido perdiendo de manera constante su poder político y social, en virtud del surgimiento a la vida política activa de otras clases sociales: la pequeña burguesía urbana e intelectual ascendente, y sobre todo durante el período 1942-1948, los artesanos, asalariados urbanos y obreros agrícolas bananeros. Pero ese Estado, pese a todo “como consecuencia de la realidad económica (era) esencialmente un instrumento de los intereses del Capital imperialista y del gran capital privado criollo”.

No existía entonces bien estructurado un sector de burguesía industrial o comercial realmente distinto del tradicional agroexportador, concentrado hasta los años cincuenta en la actividad agropecuaria. Pero las limitaciones que ese esquema imponía a los sectores medios ascendentes, en particular después de 1948, forzaba a buscar alternativas económicas y sociales que, según se vio, se centraban en el papel que debía jugar el Estado en el desarrollo de nuevas actividades económicas.

Esto produjo un Estado en el cual expresaban, como condensación de las contradicciones económicas y sociales del país, las relaciones específicas de fuerza y perspectiva entre las clases y fracciones de clase ya existentes hasta 1948 y el germen de un nuevo sector de la burguesía que se iría configurando en torno a la gestión administrativa del Partido Liberación Nacional: la nueva burguesía burocrática.

Esta, al principio relativamente débil, fue creando diversos mecanismos de poder y estructuras organizativas del Estado que correspondían tanto a su programa como a sus potenciales intereses de fracción de clase dominante. La nacionalización de los depósitos bancarios, la descentralización administrativa con la consecuente proliferación de instituciones autónomas y burocracia, fueron jalones importantes en la constitución posterior de esa fracción dominante nueva.

Inicialmente, los nuevos políticos venidos a la escena nacional, se contentaron con impulsar el viejo programa aprista: apoyarse en el Estado para impulsar un capitalismo privado autónomo. Corresponde muy bien a esta etapa la figura conocida y criticada hoy del empresario-político. Esto no fue una desviación del pensamiento original del centro socialdemócrata sino su consecuencia necesaria. Quienes promovían tales tesis eran los representantes directos de las clases y

sectores que postulaban esa gestión económica, basada en el Estado, como una necesidad nacional. El germen de abusos y eventualmente de desviaciones notorias de los fines del Estado, por la utilización de recursos e informaciones originariamente supuestos a ser neutros políticamente, en virtud de la doble posición de empresario y gobernante, resultaba en el contexto dicho no solo explicable sino inevitable. El control del aparato del Estado para este sector empresarial resultaba vital para su existencia y desarrollo. Para controlarlo era preciso retroalimentar la participación política con la ayuda de las empresas sustentadas por el poder del Estado. Y una vez en este, devolver a aquellas tanto lo que estas habían arriesgado para crearse el clima favorable en el aparato estatal, como nuevas contribuciones para su incremento posterior. Con todo ello la fusión del político y el empresario y los criterios éticos que habían separado, por lo menos formalmente en el pasado, a uno y otro, tendieron a diluirse hasta desvanecerse del todo. El poder económico era indispensable para adquirir el poder político. Este, a su vez, era esencial para promover un desarrollo industrial y agropecuario distinto del tradicional, que impulsaría un adecuado crecimiento económico. Pero este, por el carácter del proyecto, no tenía otro significado que el apoyo estatal de las actividades empresariales de aquellos que ocupaban los puestos políticos claves y tenían en sus manos las decisiones fundamentales de la política económica del Estado desarrollista.

Junto con esta tendencia que originará múltiples consecuencias sociales, desde el desarrollo de ciertas actividades industriales hasta procesos de marginalización social con el impulso de actividades agropecuarias y especulaciones en tierras, etc., se vio aparecer otro proceso no por más lento menos significativo y real. El surgimiento de una verdadera burguesía burocrática. En la raíz de su desarrollo se encuentra la debilidad propia del capital nacional, que no podía afrontar los altos costos de la financiación de proyectos que, por su envergadura, requerían fuertes inversiones de capital y trabajo.

La política aquí no fue, entonces, la de tomar el Estado como base para financiar esas actividades, sino concentrarlas en el poder central y en sus instituciones autónomas o semiautónomas y compartir con el capital extranjero, en un endeudamiento creciente, cuando no galopante, la explotación de esas actividades.

Con esto, el imperialismo se aseguraba su participación a través de su interiorización en la vida económica y financiera interna, tanto a través de instituciones controladas por él, como el BIRF, el BID y el FMI, como por medio de la situación de clase existente en el país. La generación de capitalismo interno no comprometía su control y dominio de la economía nacional, sino que tendía a reforzarla al incorporar



nuevas zonas de actividad productiva a la vida económica del país, dependiente en sus fundamentos de los centros metropolitanos. Pero además, en las esferas económicas decisivas, como la creación de la llamada infraestructura-carreteras, puentes, vías y sistemas de comunicación, electrificación, agua potable, vivienda, etc., la participación masiva de la financiación internacional ataba el esfuerzo económico del país a la política expansiva de los grandes consorcios e instituciones financieras internacionales. Todo esto, sin un real proyecto de desarrollo económico nacional integral, con una correlación de fuerzas de clase en el interior que neutralizaba a todas ellas y creaba un vacío que, paradójicamente, prolongaba la vida de la democracia liberal costarricense, lejos de contribuir a los propósitos declarados por los fundadores de esta nueva alternativa de desarrollo económico social de corte populista y vocación socialdemócrata, los alejaba de ellos y establecía, a lo sumo, una nueva forma de dependencia político-económica más profunda y acorde con las necesidades expansivas del capital en su etapa moderna de transnacionales e internacionalización.

Sin embargo, esta política que combinaba implementar propósitos nacionales de desarrollo autónomo, perfectamente expresados por el ICE, con satisfacer las presiones financieras internacionales —préstamos atados, privatización de actividades en manos del Estado, etc.—, concentró en el aparato estatal autónomo y centralizado la fuerza principal del capital costarricense.

La participación del Estado, entonces, se amplió considerablemente a la esfera propiamente productiva, en la cual se introdujo de manera directa e indirecta. Con ello no solo jugó el papel tradicionalmente reconocido a él de vigilante del *statu quo* y promotor de las actividades económicas privadas, sino de empresario capitalista colectivo, que actúa a nombre de la sociedad, pero cuyos puntos decisivos claves se concentraban en los titulares de las respectivas funciones burocráticas. Estos, teóricamente, pueden variar, pero por múltiples razones —períodos de nombramiento, descentralización administrativa y, como en el caso de CODESA, naturaleza jurídica de la entidad y hasta convenios políticos interpartidarios plasmados en una legislación particular como el llamado 4/3—, otorgan una estabilidad cada vez mayor a los titulares de dichas funciones claves.

La consolidación de la burguesía burocrática en Costa Rica, impulsora de un capitalismo de Estado que se quiere presentar como antesala de un socialismo democrático de inspiración escandinava, contó durante los primeros períodos presidenciales posteriores a 1448 con la dificultad de la alternabilidad en el ejercicio del poder por las derrotas del Partido Liberación Nacional. Por eso es que el triunfo consecutivo del Partido dicho en las elecciones de 1970 y 1974 se

puede considerar —lo cual es una hipótesis bastante plausible— como el momento político justo en que dicho sector cristalizó como fracción de clase en la vida social y política costarricense. Todo parece indicar que la primera liberación del empresario-político tiene a la cabeza al señor Figueres, mientras que la segunda, la del político-empresario, políticamente la simboliza el señor Oduber, aunque socialmente quien la representa mejor, por la identificación práctica del actual presidente con el modelo de empresario-político, es el actual candidato de dicho partido don Luis A. Monge.

Las manifestaciones políticas de este sector, cuya base de poder y beneficio, así como de explotación y acumulación, es el aparato del Estado, son múltiples y se hacen cada vez más evidentes. Quizá el factor más importante desde el ángulo político-electoral lo constituye el pago adelantado de la deuda política, que permitió a los sectores burocráticos de gobierno y oposición, garantizarse una financiación que los independizaba de otros sectores capitalistas privados, sin fuerza suficiente para competir con el poder económico y financiero del Estado. En este sentido, el pago adelantado de la deuda política, constituiría la fuente nutricia fundamental para el mantenimiento y desarrollo de una clase política que exprese, desde luego a nombre de los intereses generales de la población, los muy particulares de una burguesía burocrática que intenta, por todos los medios, mantenerse como fracción dominante de la burguesía costarricense.

Sin embargo, la posición de esta nueva fracción de clase dominante es altamente contradictoria. Obligada por su situación a transar con el imperialismo, mantiene relaciones de resistencia y entrega. Sustentada por las finanzas públicas sufre el doble reclamo de los sectores populares por las limitaciones y baja calidad de los servicios de un lado, y por el alto costo de los mismos, por otro. Impulsada a ampliar la esfera de influencia del Estado, entra en contradicciones con los empresarios privados y con el propio imperialismo, que ven con aprehensión esa ampliación de lo público en detrimento de lo privado. Endeudada externamente, como medio esencial para financiar las actividades públicas, debe incrementar su política impositiva sobre los grupos económicamente débiles, pero más numerosos, enajenándose así su apoyo. Interesada en disminuir las brechas sociales por su carácter explosivo, debe seguir políticas restrictivas del consumo de los sectores medios, pero como estos son la base de la política económica expansiva de las transnacionales, que controlan los medios de comunicación colectiva y las agencias de publicidad que conforman los patrones de consumo, pierden también el apoyo de los sectores medios, antigua base de apoyo de su partido, sin ganar la de los marginados que entran, a su vez, en la carrera de las aspiraciones

crecientes. Disfrutando de privilegios por función, deben asumir las tareas de control, limitación y vigilancia en sus respectivas instituciones para aumentar la eficacia de sus subordinados. Estos, testigos de la clara diferenciación social que se produce, se ven forzados a un proceso de gremialización y demandas que aquellos no pueden satisfacer sin menguar el patrimonio de sus empresas. Con ello, la lucha de clases hace su ingreso en el interior de las ciudadelas cerradas de la burguesía burocrática. Para encontrar una salida, la burguesía burocrática busca nuevas relaciones en el campo internacional que le faciliten una apertura económica y financiera que corte tantos lazos que la limitan y acogotan. Abren la puerta entonces a la quinta esencia del capitalismo burocrático de Estado, constituido por la Unión Soviética y su clase dirigente. Despiertan con ello la suspicacia tanto de las otras clases dominantes en el país, incluido el sector empresarial-político del propio Partido Liberación Nacional, y sobre todo del imperialismo norteamericano, que intuye una amenaza de penetración en un área considerada como esencial para su seguridad nacional. El camino resulta sin salida: concediendo a los económicamente fuertes, para asegurarles su lealtad de clase, no logra el apoyo real y efectivo de los económicamente débiles, que la sienten ajena y contraria a sus postulaciones originales. Con temor de apoyarse abiertamente en el capitalismo burocrático monopolista de Estado soviético, no logra disipar las aprehensiones del capitalismo imperialista norteamericano. Presionada por las crecientes reivindicaciones internas, que la afectan directamente, recurre de manera cada vez más inmediata a métodos represivos y a fortalecer el aparato de seguridad, que no solo se extiende, sino que asume más y más funciones. Desarrolla, con ello, las condiciones políticas, sociales y represivas necesarias para ser desplazada y sustituida por un poder dictatorial centralizado que se divorciaría cada vez más de la democracia tradicional.

Como puede verse, es esta una consecuencia no querida pero directamente derivada de la concepción populista del llamado Estado antimperialista, en la cual este debía cumplir la función específica de agente económico del desarrollo capitalista nacional. Lo que pareciera demostrar esta experiencia de los últimos 25 años, es que los problemas y planteamientos programáticos no pueden prescindir del hecho de que las posibilidades de un capitalismo nacional autónomo quedaron cerradas para la época actual. El problema del desarrollo, entonces, deviene claramente en un problema político que debe plantearse, desde un inicio, no solo la etapa inmediata de superación de la dependencia y la conveniencia de la participación del Estado, sino el fin último del desarrollo social.

Todos estos hechos demuestran que los objetivos trazados por los ideólogos del Centro para el estudio de los problemas nacionales no solo no fueron alcanzados, sino que, por el contrario, la dependencia con los intereses extranjeros y el poder de los sectores capitalistas tradicionales fue incrementada, aunque con titulares y características distintas.

Esto hizo que los problemas centrales de la revolución latinoamericana planteados ya en los años veinte por comunistas y populistas, se replantearan nuevamente en los años sesenta. Aparte del entusiasmo político trágico de la juventud latinoamericana, que se lanzó a la guerrilla unilateralizando la experiencia cubana, la América Latina se halló enfrentada a los mismos problemas que, ciertamente con significativas modificaciones nacionales e internacionales, estructurales y coyunturales, había conocido en los primeros tiempos de la Internacional y del aprismo.

La visión populista típica, que concebía a los sectores medios urbanos y rurales como la base fundamental del proceso de cambio en Costa Rica, con el apoyo de los que Facio denomina “la pequeña clase proletaria”, dejaba sin considerar el proceso de diferenciación clasista interno que habría de producirse en los propios sectores medios, base social de su programa.

Utilizando el aparato del Estado para desarrollar actividades privadas, que terminaron convirtiéndose a una parte de la llamada clase media en nuevos empresarios capitalistas vinculados a actividades no tradicionales, aunque también hubo inversiones de este tipo, nuestro populismo no puede evitar la frustración de importantes sectores para los que no había alternativa capitalista posible.

Amparados entonces al poder del Estado, usufructuando de las posibilidades de educación, viajes al exterior, becas y seguridad laboral, amén de préstamos y otros beneficios desde instituciones más o menos controladas políticamente, esos sectores medios encontraron nuevas posibilidades de ascenso con la integración centroamericana. Con cierta preparación tecnocrática, algunos de ellos se incorporaron a las filas de la burguesía gerencial integracionista, como encargados de administrar los intereses, a nivel local, de las casas matrices atraídas por los incentivos fiscales excesivos que se otorgaron al momento de ingresar nuestro país en el Mercomún.

Pero el grueso de dichos sectores medios se concentraron propiamente en la actividad del Estado. Concibieron a este como promotor directo y monopolista de actividades económicas privadas. Ya no se trató de la concepción mixta de la economía, que daba al Estado oportunidad de invertir en actividades poco o nada rentables para el capital privado. Se produjo, más bien, un desbordamiento de la actividad

estatal en el campo empresarial, donde entró en franca competencia con el capital criollo y extranjero, al último de los cuales no se excluiría del todo, sino que se trataría de canalizar de modo tal que fortaleciera el poder económico del Estado.

La política orientada a desarrollar, bajo el control de la burguesía burocrática, un capitalismo de Estado, que incluso se ha querido presentar por algunos como procedimiento práctico y obligado para implantar el socialismo en Costa Rica, muestra todas las contradicciones inherentes a la fracción de clase que la impulsa y conlleva, además, los otros peligros ya apuntados que se insertan en el contexto internacional contemporáneo.

Los sectores de burguesía burocrática podrían jugar un papel positivo, de carácter nacional, en los esfuerzos globales de los sectores populares por alcanzar el desarrollo económico y social independiente. Pero por sí sola, o en alianzas internacionales riesgosas, esta fracción de la clase dominante no tiene ninguna perspectiva real de alcanzar plenamente sus objetivos y cualquier intento, en ese sentido, comprometería seriamente la estabilidad política del país.

El equilibrio relativo de las diversas fracciones de la clase dominante y la creciente actividad de otros sectores sociales que reclaman una participación no solo económica sino política en la vida nacional, obligan a concesiones y reajustes que establecen límites claros a las posibilidades de crecimiento de todas esas fracciones. Cualquier elemento externo que interviniere de manera decisiva, para inclinar el fiel de la balanza política en uno u otro sentido, provocaría necesariamente una serie de golpes y contragolpes, expectativas y frustraciones, que podrían acabar con el sistema político nacional, tal y como lo conocemos hasta ahora. La incapacidad política de todos estos sectores, ya sea para afrontar las presiones sociales generadas con políticas demagógicas, o bien para responder flexiblemente a las demandas crecientes de una sociedad que busca el desarrollo económico con progreso social y político, hace cernir sobre nuestro sistema de vida político, en un contexto latinoamericano nada halagüeño, graves peligros de los cuales existe ya más de un síntoma.

La amenaza de sustitución del sistema político actual, por uno represivo y centroamericanista en el mal sentido del término, tiene una fuente más profunda aun en los procesos integracionistas del istmo, en que se insertó nuestro país al comienzo de la década de los años sesenta.

La apertura de toda el área centroamericana, de manera irrestricta, al capital extranjero en general, y al norteamericano en particular, coincidió con el proceso gigantesco de expansión imperialista. La inversión extranjera no solo fue propiciada de manera indiscriminada,

por una política suicida de incentivos fiscales, sino por la ausencia de políticas claras y coordinadas de regionalización de las inversiones, políticas congruentes de transmisión tecnológica, etc. Con ello, no solo surgió una industria complementaria y de ensamblaje, controlada por el capital extranjero, sino que esta, por sus facilidades tecnológicas y de marketing, de financiamiento interno y externo, etc., resultaba invencible para la débil industria local. En vez de competencia hubo absorción. En vez de desarrollo industrial hubo industria sin industrialización.

Socialmente esto produjo un nuevo sector social en la clase obrera, surgido al amparo de la integración, sin tradiciones de lucha, comparativamente situado en un nivel social superior al del medio del que provenía, afectado por una perspectiva consumista y una política desmovilizadora de las propias empresas transnacionales. Hizo también su aparición otro sector, el gerencial integracionista directamente vinculado a ese capital extranjero y colocado en la perspectiva de esos intereses, difícilmente conciliables con los nacionales.

El peso específico de ese sector en la vida económica nacional, corrió parejas con el incremento de la actividad productiva de las empresas integracionistas y el comercio en el área. Y a mayor poder económico correspondió la búsqueda de mayor poder social y político.

Sin embargo, estos nuevos sectores empresariales privados no se encontraban colocados históricamente como promotores del progreso político y social, sino que iban por su propia situación al encuentro del ya alcanzado por el país antes de su llegada. Estas ventajas sociales y políticas devenían, en el contexto centroamericano de competencia intermonopólica y franco retraso socio-político, en condiciones negativas desde el punto de vista de la competitividad. La democracia política que permitía la organización gremial y la participación, si bien limitada, en los asuntos públicos, tenía así que aparecer como obstáculo para el progreso industrial integracionista. En nombre de una eficacia y tecnificación del Estado y su gestión, este sector tendió a cuestionar el precio democrático de las instituciones demo-liberales. Preocupado por el libre movimiento de capital y trabajo, las fronteras nacionales devienen para él simples barreras. Ansioso de seguridad en la inversión, cifra su confianza en la modernización del aparato represivo, por lo demás en concordancia con las estrategias continentales del imperialismo norteamericano.

Todo esto conduce a la paradoja relativa de que el desarrollo de las fuerzas productivas en el país, en el contexto de un proyecto integracionista basado en la inversión extranjera y el capital transnacional, va directamente en contra de las conquistas democrático-liberales de nuestro pueblo.

Esto explicaría, al menos en parte, el proceso de erosión al que se ha visto sometido nuestro sistema político, así como lo fútil de los intentos de resolver la crisis de nuestra democracia liberal mediante la revisión de la estructura jurídica del Estado.

La realidad es que no es nuestra constitución política lo que está en crisis, es la naturaleza social y política del sistema imperante, su condición dependiente y subdesarrollada que hace inoperante los proyectos políticos de las diversas fracciones de la clase dominante. Una por haber agotado su papel histórico sin haber podido superar su simplificado esquema agroexportador; otra por transmitir el modelo supranacional de sus respectivas casas matrices que promueven el consumo elitista y profundizan la dependencia y el subdesarrollo; y, en fin, la última, por constituir un híbrido incapaz de alcanzar una solución efectiva de los problemas, sin comprometer radicalmente sus propias bases de apoyo político y unificar en su contra a las otras fracciones de la clase dominante.

Esto evidencia, en suma, la urgente necesidad de un nuevo bloque de fuerzas sociales en el poder político, que supere tanto el carácter dependiente y subdesarrollado de nuestro sistema económico, la condición híbrida del papel del Estado en la economía y la ausencia de un auténtico y nuevo bloque hegemónico de poder en la dirección de los asuntos públicos.

En este sentido, la crítica situación nacional, que abarca desde lo económico hasta lo ideológico, se entronca con la situación internacional. Esta, marcada por una nueva distribución de fuerzas a nivel mundial, nos sitúa claramente en el tercer mundo y nos enfrenta de manera directa a la política hegemónica de las dos grandes superpotencias. La creación de un bloque nuevo de poder hegemónico en el país, exige tomar en consideración tanto las tareas a realizar a nivel interno y externo, como la cuestión estratégica fundamental de impedir la sustitución de una dependencia encubierta en el mito de una libre competencia y una libre empresa, una libertad y una democracia que no se sabe dónde se encuentra, por otra dependencia que se disfraza de socialismo, seguridad y paz.

Esto implica, en resumen, constituir el nuevo bloque de poder a partir de estos elementos claves:

- a) La base social solo puede encontrarse en la clase obrera nacional, el campesinado pobre y medio, la pequeña burguesía urbana y rural, sólidamente organizados, unidos y participantes en el proceso político nacional-liberador.

- b) Como factor secundario, pero de gran significado político, está la posible alianza con los sectores de la burguesía nacional, industrial y agraria, objetivamente interesados en liberar al país de cualquier dominación imperialista.